

DESMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE CALIMA DE LAS AUC

El 18 de diciembre de 2004 se produjo la desmovilización de 557 hombres del denominado Bloque Calima de las AUC. Bajo la resolución No. 297, los combatientes se concentraron en la Finca El Jardín, ubicada en el corregimiento Galicia, municipio de Bugalagrande (Valle) hasta las 24 horas del día 10 de enero de 2005. El proceso lo encabezó “Hernán Hernández”, el mismo comandante que semanas antes había liderado la desmovilización del Bloque Bananero en el Urabá.

Resulta útil comenzar por revisar el dispositivo de los grupos de autodefensa en el Valle contrastándolo con la estructura que se desmovilizó. Según el orden de Batalla de la Tercera Brigada del Ejército, en este departamento opera el denominado Bloque Conjunto Calima – Pacífico (BCC), cuyo comandante es Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna” o “Adolfo Paz”, oriundo de Cartago (Valle) quién a su vez es el inspector general de las AUC. Esta organización esta conformada por las siguientes estructuras: El frente Mártires de Ortega, al mando de Elkin José Casarrubia, alias “El Cura” compuesto por 120 hombres y con presencia de los municipios de Jamundí en el Valle, Buenos Aires, Timba, Suárez, Morales y Cajibío en el Cauca; el frente Cacique Calarca, cuyo comandante es alias “Giovanni”, opera en municipios de Tulúa, Buga, San Pedro, Sevilla, Caicedonia, Bugalagrande, Buenaventura y la vía la mar, así como en Génova (Quindío) con 400 paramilitares; el frente Calima al mando de alias “Hernán Hernández” con 280 hombres e influencia en el área del corregimiento de los Cristales en el municipio de Río Frío, el corregimiento de Chicoral en Bugalagrande y los corregimientos de San Rafael, Santa Lucía, La Marina y Barragán del municipio de Tulúa; y el frente Pacífico con 100 paramilitares dirigidos por el suboficial retirado del Ejército, Bellaisad Durán, con presencia en Buenaventura y Dagua.

Según lo manifestado por “Hernández”, en la desmovilización habrían sido desarticuladas todas las estructuras del Bloque Calima, a excepción del frente Pacífico. Si se hace un ejercicio simple de sumar el número de hombres que, según la Tercera Brigada, tiene el Bloque Calima en el Valle, daría como resultado 900 combatientes y descontándoles los 100 del Pacífico, esta cifra sería de 800. Cómo se mencionó, los desmovilizados fueron 557, habría que preguntarse entonces por la suerte de los 243 restantes. La primera posibilidad es que el dispositivo de la Tercera Brigada no corresponda realmente con la dimensión de este grupo armado irregular en lo que se refiere a este departamento, aunque en necesario decir que las órdenes de batalla manejadas por las Fuerzas Militares tienden a reducir la presencia de las organizaciones paramilitares, antes que exagerarlas. La segunda posibilidad es que parte de la estructura del Bloque Calima, siga operando de manera “informal” en esta región, manteniendo relaciones con algunos mafiosos del norte del Valle y accionando

como una red que procura garantizar la seguridad en algunas zonas donde la amenaza de la insurgencia se mantiene latente. Sin embargo habría que tener en cuenta en este caso que, contrario a lo que sucedió en Cundinamarca y de la misma manera que ocurrió en el Catatumbo, la mayoría de los paramilitares que hacían parte de esta estructura venían de otras regiones. Alrededor del 70% de los combatientes provenían de Antioquia, de municipios como Apartadó, Carepa, Necoclí, Mutatá, Chigorodó, San Juan y Arboletes, en el Urabá antioqueño. Por lo tanto es de esperarse que la mayoría de los desmovilizados retornen a sus lugares de origen.

Como tercera posibilidad y haciendo referencia específicamente a la tropa faltante, no hay que descartar que parte de los combatientes de estas organizaciones hayan sido reclutados por las estructuras sicariales que operan en este departamento. Ante la incertidumbre de entrar en un proceso de desmovilización sin un marco judicial concreto y con un nivel de incentivos económicos bajo en relación con los ingresos percibidos de las prácticas ilícitas – como la extorsión o el narcotráfico -, es posible que parte de la tropa no se haya integrado al proceso de reincorporación a la vida civil.¹ El examen de estos posibles escenarios, así como otros aspectos que tienen que ver con la desmovilización de este Bloque, deben hacerse desde una revisión histórica del desarrollo de esta estructura, su relación con organizaciones mafiosas, la disputa que mantuvo con la insurgencia, un pasado marcado por constantes ataques a la población civil, así como por el reciente asesinato de algunos de sus comandantes.

Los grupos paramilitares y narcotráfico en el departamento del Valle

Las agrupaciones de autodefensa en el Valle del Cauca se presentan de múltiples maneras. Relacionadas con enfrentamientos entre grupos mafiosos, operaciones de “limpieza social”, confrontaciones directas con las guerrillas, estas organizaciones juegan un amplio rol en la definición de poderes sociales y económicos en este departamento.

A principios de los noventa, los grupos de narcotraficantes organizaron grupos armados que resolvían de manera violenta y a favor de sus financiadores, los diferentes litigios por tierras u otras problemáticas. Se caracterizaron por la dureza de sus acciones, especialmente por el desarrollo de masacres como la de Caloto (Cauca), Trujillo (Norte del Valle), Miranda (Cauca) y Riofrío (Norte del Valle). La baja actividad de la insurgencia a principios de los noventa, así como las múltiples disputas internas, terminaron por mermar el poder de estas agrupaciones y por hacerlas menos visibles.

¹ Algunas versiones señalan que mientras que los carteles del norte del Valle ofrecían a los miembros de sus estructuras un salario de un millón de pesos mensuales, el pago de las autodefensas era de \$350 mil pesos al mes; esto evidentemente pudo generar deserciones y cambios de bando en los frentes paramilitares.

Ya para mediados de 1995 se comienza a configurar un nuevo escenario. Propietarios de terrenos en zonas planas de Jamundí, Pradera y Tulúa, tanto legales como narcotraficantes, estaban siendo extorsionados y la instalación de laboratorios en las zonas rurales se había complicado al no haber autonomía alguna. El cañón de Garrapatas y la vía Cali – Buenaventura estaban bajo control o eran permanentemente asediados por la insurgencia, lo cual impedía a los narcotraficantes el acceso a dos corredores indispensables para el tráfico de drogas y la llegada a los puertos de embarque. Además la entrega de los capos del cartel de Cali cambió la relación de fuerzas en la zona ya que Pacho Santacruz y otros miembros de la mafia habían llegado a acuerdos de no agresión en el Valle, sobre todo con el ELN. Sin embargo, la muerte de Santacruz y el ascenso de Varela, además del enfrentamiento entre este último con el clan Herrera, aceleraron la formación de estructuras armadas privadas.

El renacimiento del paramilitarismo en el Valle coincide con la redefinición de una nueva cúpula de narcotraficantes cuyo poder preponderante tiende a mostrar una nueva hegemonía, luego de la entrega de grandes capos y la muerte de otros. Los vacíos de poder se redefinieron violentamente. El aumento en las acciones de la insurgencia a partir de 1998 dio paso a la formación de alianzas entre diversos sectores de la vida económica y social vallecaucana, legales e ilegales, que se valieron del aparato armado de los carteles como plataforma militar. En 1999 las autodefensas hacen su aparición con el denominado Bloque Calima el cual en parte es una reacción a las acciones militares de la insurgencia y el resultado del posicionamiento de las nuevas elites del Valle, así como la necesidad de garantizar los canales de sus principales fuentes de financiación, es decir, el narcotráfico.²

Además del Bloque Calima, en la zona norte del departamento del Valle se encuentran múltiples estructuras sicariales del narcotráfico, autónomas y con un poder importante. Con cerca de 300 hombres, que al parecer tienen como principal jefe al narcotraficante Diego Montoya Henao, estos grupos han evolucionado en el último año hacia la conformación de pequeños ejércitos privados dada la coyuntura del conflicto armado. Parte de estos ejércitos fueron la respuesta a la confrontación entre los jefes de mafia en el norte del Valle con narcotraficantes de Cali pero también a la insurgencia, especialmente las FARC que tienen el objetivo de extender su dominio sobre la cordillera occidental.

Versiones locales señalan que Varela estableció desde hace unos años un acuerdo con la guerrilla de las FARC, el cual, aparte de funcionar como un pacto de no-agresión, establece algunos parámetros respecto a las actividades de narcotráfico en la zona. Como respuesta a esto, Montoya habría establecido un acuerdo con los grupos de autodefensas, especialmente con los frentes Cacique Calarcá y el Pacífico, los

² Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República. “Panorama Actual del Valle del Cauca”, Bogotá, enero de 2003.

cuales hacen parte del Bloque Conjunto Calima, comandado por “Don Berna” – aunque este último negó algún tipo de relación con alias “Carolo”, así como la compra o venta del Bloque Calima -. No se sabe con exactitud en la actualidad cómo funcionan estos acuerdos, lo cierto es que han dinamizado la violencia en algunas zonas del departamento del Valle, reviviendo la vieja lucha entre carteles.

La consolidación del Bloque Calima: acciones armadas y afectación a la población civil³

El hecho que marcó la llegada del Bloque Calima fue el homicidio de un campesino y su hija de 18 años, el 31 de julio de 1999, en el corregimiento de La Moralia, en el municipio de Tulúa. En esta ocasión hombres uniformados señalaron a sus víctimas como auxiliares de las FARC. A partir de este evento se registraron una serie de desplazamientos.

Un mes después integrantes del Bloque Calima incursionaron en el corregimiento Chorreras, en Bugalagrande, donde cuatro personas fueron asesinadas. A los pocos días siguieron su recorrido por la vereda Platanares, en San Pedro; en corregimiento San Rafael, en Tulúa; Pueblo Nuevo en Buga; en Paila Arriba en Bugalagrande, donde diez pobladores fueron asesinados por paramilitares. De esta manera fueron ampliando su radio de acción, extendiendo su presencia a cada vez más poblaciones y cobrando más víctimas, aproximadamente unas 60 en las siguientes poblaciones: Barragán y Santa Lucía en Tulúa; El Venado y La Meiba, en Sevilla; Buenos Aires en San Pedro; Portufal de Piedras en Riofrío; La Betania y La Selva en Ginebra; Pueblo Nuevo y La Habana en Buga – precisamente en esta última población se registró una de las masacres de mayores proporciones con un saldo de 24 muertos -.

En Calima – Darién, en regiones como Río Bravo, El Palmar y otras veredas, la cuota de muertes ascendió a 30. El sur del Valle también fue impactado por el accionar del Bloque Calima, específicamente por el denominado frente Farallones, el cual tiene la responsabilidad por más 30 homicidios. De la misma manera, en veredas y corregimientos de Palmira, Florida, El Cerrito y Pradera murieron 70 habitantes. Por su parte, el Bloque Pacífico, que actúa en la zona de Buenaventura, Dagua y otras poblaciones aledañas, tiene responsabilidad en 18 masacres, donde fueron asesinados por lo menos 120 pobladores – la mayoría de los crímenes ocurrieron en veredas y corregimientos de la antigua vía al mar y en barrio del Puerto -. Estos hechos sin contar la masacre del Naya donde murieron alrededor de 35 personas.

A pesar de que el Ejército y la Policía del Valle no tienen estadísticas consolidadas, consideran que en casi cinco años de accionar del Bloque Calima, esta organización

³ Basado en el artículo “A las 10:00 a.m. es la cita con el desarme”. EL PAIS, 18 de diciembre de 2004.

habría asesinado a unas 450 personas – 300 en el centro del departamento - y habría forzado el desplazamiento de 15.000 campesinos – a esto se le suman 60 desapariciones -. Wilson Rey, del Observatorio para la Paz del Valle, declaró que en los últimos cinco años el Bloque Calima cometió 68 masacres, unos 249 homicidios selectivos y propició 68 desplazamientos. La Fiscalía General de la Nación aún no ha definido cuántos desmovilizados tienen procesos pendientes por crímenes atroces o por otros delitos que no les permitan acceder al beneficio de la amnistía. A este respecto algunas versiones señalan que unos 50 miembros del Bloque Calima fueron trasladados a Santa Fe de Ralito (Córdoba), donde deberán permanecer hasta que el Congreso apruebe la Ley de Verdad, Justicia y Reparación.

La disputa entre el Bloque Calima y la guerrilla

Los enfrentamientos entre la guerrilla y las autodefensas presentan un incremento a principios de la presente década, con el rápido incremento en el poder de fuego del Bloque Conjunto Calima (BCB) y la contraofensiva de la insurgencia contra algunas bases de los paramilitares, lo cual se tradujo en una serie de combates en los años 2001 y 2002, los cuales se desarrollaron principalmente en la parte alta de Tulúa. Buga, Pradera y Palmira en la Cordillera Central, así como en los municipios de Dagua, Calima y Jamundí en la Cordillera Occidental. La incursión de las autodefensas en el Naya en el 2001, puso de presente la dimensión de los hechos y dio lugar a una operación militar de envergadura por parte de la Fuerza Pública. Dicha operación, a la que se le sumó el desconocimiento del terreno por parte de los miembros de las autodefensas – pues no eran de la región -, y el continuo hostigamiento y combates por parte de la guerrilla en especial del frente 30 de las FARC, derivó en la desarticulación temporal del frente Farallones del Bloque Conjunto Calima.

De manera paralela, en los municipios de la región pacífica, las FARC incrementaron su presencia, de la cual ya habían dado muestra en el ataque a la Base de Tokio el 10 de marzo de 2001, cuando guerrilleros del frente 30 y del Bloque Móvil Arturo Ruiz, atacaron esta base de la Infantería de Marina. Durante los meses siguientes, el aparato militar de las autodefensas se recompuso. El golpe sufrido en El Naya, se sumó a las bajas sufridas en el municipio de Tulúa en enero del mismo año. Durante los meses de septiembre y octubre de 2001 el Bloque Calima incrementó sus incursiones, esta vez en la Cordillera Central, en los municipios de Buga, Tulúa, Palmira, Pradera y Florida.

En el 2002, el BCB desarrolla una ofensiva que logró el control del casco urbano de Buenaventura y un amplio dominio en la parte plana de Jamundí, Candelaria, Buenos Aires (Cauca) y Yotoco; además incursiona en los cascos urbanos de Dagua, Calima-Darién, entre otros municipios. En los meses de febrero y marzo de 2002 se presenta una gran incursión del Bloque Calima en la Cordillera Occidental, en la cual a pesar de los arduos enfrentamientos, las FARC ratificaron el espacio ganado ante estos grupos.

Los combates tuvieron lugar en varios puntos: en el Alto Anchicayá, Queremal, en los municipios de Dagua y Buenaventura, así como en Bellavista y San Antonio en el municipio de Jamundí.

En el 2003 y 2004, no se conoce de enfrentamientos entre guerrillas y las autodefensas en el suroriente del departamento del Valle. El único evento registrado se produjo en el nororiente del Cauca, en el mes de julio de 2004, en la vereda Munchique en el municipio de Buenos Aires (Cauca), donde subversivos de la columna móvil Jacobo Arenas se enfrentaron con miembros del BCB, sin que se presentaran novedades de personal.

Dinámica mafiosa y el homicidio de comandantes del BCB

Es relevante mencionar que la desmovilización del Bloque Calima estuvo antecedida por una serie de homicidios de comandantes de esta agrupación. La gestión de la reincorporación de los paramilitares a la vida civil había sido liderada por alias “Fernando” vocero político que había oficiado como tal durante los últimos cuatro años. Quince días antes de que se produjera la desmovilización del Bloque Calima este comandante fue asesinado por un sicario que le disparó cuando salía de un taller de mecánica en Cali.

A esta muerte hay que agregarle el homicidio del ex suboficial del Ejército “Juan González”, cuyo verdadero nombre era Francisco José García, ocurrido el 28 de marzo de 2001 cuando departía en un establecimiento público en el corregimiento La Marina, en el municipio de Tulúa. También hay que incluir la muerte de alias “Román”, identificado como Norberto Hernández Caballero, ex militar, acusado de asesinatos con motosierra, quien fue asesinado el 28 de julio de 2002 en una taberna en el barrio La Victoria, en Tulúa.

Desde su aparición el Bloque Calima ha sido rodeado de nexos con el narcotráfico en el centro y norte del Valle, donde al parecer es propietario de numerosos predios. Su vocero, “Hernán Hernández” asegura que no hay relaciones con los mafiosos y manifiesta, en cambio, que ha contado con el respaldo de sectores agrícolas y empresariales. Sin embargo tanto las autoridades locales, la Fuerza Pública y los mismo habitantes de la región hacen referencia a una serie de alianzas, principalmente con el cartel liderado por Montoya.⁴

⁴ Las últimas versiones señalan que las alianzas entre paramilitares y narcotraficantes habrían superado los límites regionales. En este momento Montoya habría pactado su permanencia en una zona determinada del Magdalena Medio, en medio de un acuerdo de protección a cambio de dinero con algunos de los comandantes del Magdalena Medio. Por otro lado se rumora que Varela tendría un acuerdo con alias “Macaco” uno de los comandantes del Bloque Central Bolívar.

La permanencia del Bloque Pacífico: los narcotraficantes en medio de la negociación

La desmovilización del Bloque Calima, incluía también la desarticulación del Bloque Pacífico, sin embargo esta no se produjo debido a la negativa por parte del Gobierno, debido supuestamente al incumplimiento de algunas cuestiones de procedimiento. Las primeras versiones señalaron que la desmovilización de este Bloque había sido aplazada tras un infarto sufrido por su principal comandante, Francisco Javier Zuluaga Lindo, conocido con alias de “Gordo Lindo”. Sin embargo en el desarrollo de los hechos el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, declaró que el gobierno desautorizaba esta desmovilización debido al incumplimiento de algunos requerimientos, la falta de una preparación previa y un visto bueno del gobierno.

Alias “Gordo Lindo” habría planeado desmovilizarse con 45 hombres que componen su aparato de seguridad personal en Santa Fe de Ralito, en un acto a realizar ante mandos medios de la oficina del Comisionado de Paz y de miembros de la misión del apoyo al proceso de paz de la OEA, con asiento en Montería. Luis Carlos Restrepo lo desautorizó argumentando que cada uno de estos actos tiene que contar con su presencia y que además, una desmovilización de este tipo requería los filtros de la Fiscalía, el DAS, la Policía y CTI, como se hizo en el Catatumbo y en el Urabá.⁵

Para algunos la desautorización por parte de Restrepo habría estado relacionada con el hecho de que alias “Gordo Lindo” es uno de los miembros de la cúpula negociadora más relacionado con el narcotráfico. En una entrevista realizada por la FM de RCN al Comisionado, el 20 de diciembre de 2004, se le preguntó “Tenemos una duda con lo de ‘alias Gordo Lindo’, que por cuestión de narcotráfico no le habrían permitido su desmovilización. ¿Eso fue así?”, a lo que el comisionado Restrepo respondió: “La realidad es que yo fui informado el día viernes que este señor Galindo iba a desmovilizarse en la zona de ubicación con sus hombres. Incluso creo que habían citado a los medios de comunicación. Pero yo le hice saber que ese no era el procedimiento para avanzar en la desmovilización, que eso requería una preparación previa y un visto bueno del gobierno.” Sin embargo persiste la duda alrededor de si el Gobierno preferiría posponer la desmovilización del Bloque Pacífico, por lo menos hasta que se tenga un marco jurídico claro.

Los orígenes de alias “Gordo Lindo” se remontan al Cartel de Medellín. Este hombre, prófugo de la justicia desde 1999 al ser solicitado en extradición por Estados Unidos, hizo parte de la organización de los Hermanos Ochoa Vásquez y terminó siendo socio

⁵ Según el artículo “Desmovilización de ‘Gordo Lindo’ fue desautorizada por el Comisionado de Paz”, publicado en EL TIEMPO, el 18 de diciembre de 2004, la decisión de “Gordo Lindo”, miembro del Estado Mayor negociador, había tomado de sorpresa no solo al Comisionado, sino a la misma cúpula de las Autodefensas, pues no estaba prevista en el cronograma.

de Juvenal Madrigal, el capo que sucedió a los grandes carteles de la droga y cuya organización fue desmantelada por la Policía en la Operación Milenio. Zuluaga Lindo, nació en Cali hace 34 años, es considerado por la Policía como un hombre de un perfil violento, quien maneja grupos de justicia privada que se escudan bajo el nombre del Bloque Calima.⁶ Hasta ahora el gobierno lo ha reconocido como negociador y lo ha aceptado en la mesa desde el principio del proceso, sin embargo sus relaciones con las actividades de narcotráfico son evidentes, lo que en cierta medida puede llegar a ser un obstáculo para su desmovilización. Hay que decir que Zuluaga Lindo, hace parte de aquellos capos que vieron en el proceso con las autodefensas una oportunidad para saldar sus cuentas con la justicia y limpiar su nombre intentando asumir una personalidad política.

Según lo expresado por Roció Arias la desmovilización de este frente debía producirse a mediados del mes de enero de 2004 en Condoto (Chocó), pero hasta ahora ésta no ha ocurrido, y ha sido antecedida por la desarticulación de frentes en el departamento de Antioquia y en el sur de Sucre. En este marco, una cuestión que se debe tener en cuenta es que la desmovilización del Bloque Pacífico no implica el desmonte de las estructuras narcotraficantes que operan a lo largo del Pacífico colombiano, las cuales han tenido un impacto destacado en el último año en municipios como Timbiquí y Guapí en el departamento del Cauca, extendiéndose incluso hasta Iscuande y El Charco en Nariño; en otras palabras, la reincorporación a la vida civil de alias “Gordo Lindo” y sus escoltas no va implicar un cambio sustancial en la dinámica de la región.

La desmovilización del Bloque Calima y su impacto en la violencia regional

No hay que sobredimensionar el impacto que pueda tener la desmovilización del Bloque Calima en la violencia regional. Si bien es cierto que tras su incursión en 1999 esta estructura tuvo un peso importante en la generación de violencia, en los últimos años los principales protagonistas han sido los carteles regionales, en medio de una disputa declarada entre capos.

Actualmente hay una fuerte confrontación entre el narcotraficante Diego Montoya, alias “Carolo”, con su ejército privado denominado “Los Machos” y el capo Wilber Varela que encabeza una organización llamada “Los Rastrojos”, que se está dando tanto en los principales cascos urbanos como en las zonas periféricas por medio del homicidio de personas leales al enemigo o pobladores que se niegan a colaborar – a propósito de lo anterior, se puede leer el artículo “Muerte Amarilla” en la revista Semana No. 1.154, el cual hace referencia al asesinato de una decena de taxistas en el norte del Valle en el marco del enfrentamiento entre los capos de la droga -.

⁶ VARGUARDIA LIBERAL, “Las Franquicias de las AUC, mercenarios al servicio del narcotráfico”, Bucaramanga (Santander), 15 de agosto de 2004.

La zona metropolitana de Cali viene subiendo sus homicidios levemente desde 2001. En 2004 subirían entre el 3% y el 4% respecto de lo ocurrido en 2001, 2002 y 2003. Así mismo, en el departamento del Valle subirían en cerca de 20 puntos respecto de lo ocurrido en 2003. Aunque es difícil determinar cuál es el peso que el Bloque Calima tiene en estas alzas, haciendo un ejercicio de revisión de prensa, se puede observar cómo la mayoría de las muertes son producto de vendettas entre bandas, acciones realizadas por las organizaciones sicariales y la delincuencia común – en raras ocasiones se tiene noticia de un homicidio cometido por las autodefensas -.

Por el contrario habría que esperar un retorno de la insurgencia a algunas zonas que hasta ahora habían sido ocupadas por las autodefensas. El 20 de diciembre de 2004, dos días después de que se produjera la desmovilización del Bloque Calima en el corregimiento de Galicia, tropas del Ejército se enfrentaron con guerrilleros de las FARC a 40 minutos de ese lugar; esta acción dejó como saldo la muerte de un soldado y dejó heridas en cinco más. En el último semestre de 2004, se presentaron combates en Buenaventura, Riofrío, El Cerrito, Florida, Dagua, Palmira, Buga y El Dovio, en los cuales fueron dados de baja alrededor de 15 subversivos y perdieron la vida tres militares.

Actualmente se podría decir que hay un importante dominio de la zona selvática de la Cordillera Occidental y la zona rural de la Costa Pacífica por parte de las FARC, en asocio con el ELN, lo que en cierta medida impidió el avance del Bloque Calima en esta zona. Por otra parte en la Cordillera Central el dispositivo de las FARC es amplio y de gran fortaleza, sin embargo hasta ahora ha demostrado incapacidad para acceder a la zona plana o atacar unidades militares en las ciudades. La zona centro y sur de la cordillera central que comprende una cadena de municipios por los que atraviesa este sistema montañoso, dentro de los cuales se encuentran Florida, Pradera, Palmira, El Cerrito, Buga, Ginebra y Tulúa, ha presentado una fuerte disputa por uno de los principales corredores que tiene en este departamento. En estos municipios los cascos urbanos hasta ahora habían sido controlados por las autodefensas o por grupos de narcotraficantes y la zona montañosa es de dominio de la guerrilla; en este marco el piedemonte se configura como un área de disputa constante entre los grupos armados irregulares, con diversas dinámicas de violencia que se expresan de determinada manera en cada una de las poblaciones. Con la desmovilización del Bloque Calima es probable que la insurgencia busque incidir cada vez más en las cabeceras municipales, procurando acertar golpes contra la Fuerza Pública. Así mismo, como lo evidencian los hechos ocurridos en Puerto Salvador, jurisdicción de Tame (Arauca) en la noche del 31 de diciembre de 2004, donde las FARC asesinaron a 16 personas acusándolos de tener vínculos con los paramilitares, es probable que este grupo insurgente tome represalias contra las poblaciones que se encontraban bajo el dominio de las autodefensas.

Bogotá, enero de 2005.